

1.15. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA REGIÓN DE MURCIA
(pp. 2-11)

—

**1.15. DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS EN LA REGIÓ DE MÚRCIA (pp.
12-23)**

SANTIAGO M. ÁLVAREZ CARREÑO

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de dret administratiu

Universidad de Murcia

EDUARDO SALAZAR ORTUÑO

Abogado / Advocat

Sumario: 1. Una breve panorámica de alguno de los principales retos de la política ambiental de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 2. La regulación autonómica de los procedimientos ambientales: la Ley 4/2009. 2.1. El objeto y la justificación de la nueva Ley. 2.2. Estructura y principales contenidos de la Ley. 3.3. Consideraciones críticas generales. 3. Otras manifestaciones normativas de la política ambiental. 3.1. Movilidad sostenible. 3.2. Ahorro y eficiencia en la gestión industrial del agua. 3.3. Mejora de la información y control de la actividad agrícola.

1. Una breve panorámica de alguno de los principales retos de la política ambiental de la comunidad autónoma de la Región de Murcia

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante, CARM) tiene planteados retos importantes en su definición de una específica política y normativa ambiental. El objeto de esta crónica no consiste, de forma evidente, en llevar a cabo un estudio exhaustivo y pormenorizado de todos ellos. No nos resistimos, sin embargo, a aludir a algunos de los principales aspectos y cuestiones de modo el lector se aproxime al territorio en el que se producen las novedades que, a continuación, se señalan en esta crónica¹.

En este sentido, a pesar de algunos avances significativos como el que representa la reciente Ley 4/2009, que entró en vigor el 1 de enero de 2010 y a la que haremos posteriormente una referencia más detallada, conviene dejar sentados algunos retos pendientes. En primer lugar, desde el punto de vista organizativo resulta evidente el poco peso político otorgado a la política ambiental desde que se suprimió en 2008 la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio —si bien es cierto que sólo habían transcurrido escasos meses desde su creación. Desde nuestro punto de vista, la recuperación de una Consejería específica —en la actualidad, es la Consejería de Agricultura y Agua la que soporta el núcleo de la acción ambiental regional— o, por lo menos, la existencia de un órgano de coordinación horizontal —Secretaría Autonómica— sería un elemento indispensable para otorgar el peso político y organizativo que las cuestiones ambientales deben tener. Como sintetizan GUTIÉRREZ LLAMAS y FERNÁNDEZ SALMERÓN: “el rasgo distintivo de la nueva organización gubernamental en lo referido a la política ambiental es la dispersión —incluso,

¹ Un seguimiento de la realidad murciana en este ámbito se puede obtener de los informes que los profesores A. GUTIÉRREZ LLAMAS y M. FERNÁNDEZ SALMERÓN vienen elaborando con carácter anual para el *Observatorio de Políticas Ambientales* que coordina F. LÓPEZ RAMÓN.

minusvaloración— de las estructuras administrativas encargadas del ejercicio de las funciones y competencias en este ámbito”².

En materia de espacios naturales protegidos y de protección de la biodiversidad, la vieja y amputada Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia —de la que sólo quedan vigentes sus arts. 45 a 51— hace tiempo que debió ser definitivamente derogada y adaptada a la Ley básica estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad³. No son suficientes, desde luego, las referencias que a la evaluación de las repercusiones a la Red Natura 2000 (art. 45 de la Ley estatal 42/2007) contiene la aludida Ley murciana 4/2009 que sólo da cuenta de su integración en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (arts. 95 y 96) y en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas (arts. 109 y 110). Por su parte, la legislación del suelo, representada en el ámbito de la CARM por el Decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia está pendiente de reforma para su adaptación a la Ley 8/2007 del Suelo estatal⁴. En especial, la Ley estatal establece que la alteración de los límites de los espacios naturales protegidos, mediante la reducción de su superficie o la exclusión de porciones de terrenos de los mismos para ser puestos en producción, sólo estará justificada por su degradación natural, científicamente demostrada⁵. Esta nueva medida, de específica importancia para la preservación de espacios de gran valor ecológico, sale al paso de discutibles operaciones llevadas a cabo en la Región de Murcia mediante la laminación, entre otros,

² GUTIÉRREZ LLAMAS, A., FERNÁNDEZ SALMERÓN, F., “Murcia: el desmantelamiento del departamento ambiental”, López Ramón, F. (coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2009*, Thomson/Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 653-682.

³ De acuerdo con la sistemática de la legislación básica estatal, la aprobación de esa nueva Ley debería afectar también a la Ley regional 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. El deficiente cumplimiento de los mandatos protecciónistas de esta Ley quedan puestos de manifiesto en la Resolución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, de 30 de diciembre de 2009 (accesible en <http://www.defensor-rm.es>).

⁴ Para una interpretación concordada de la legislación regional con la nueva normativa estatal *vid. J. A. LÓPEZ PELLICER, J. A., La Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Comentarios a la Ley del Suelo de la Región de Murcia*, Diego Marín, Murcia, 2009². En general, para una recopilación de la legislación ambiental de Murcia *vid. MARTÍNEZ NIETO, A., Código de Medio Ambiente de la Región de Murcia*, Wolters Kluwer, Madrid, 2008.

⁵ En este sentido, el párrafo segundo del apdo. 4º de su art. 13 establece que “sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación”.

de espacios naturales tan señosos como el Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, todavía pendiente de sentencia desde 2001 por el Tribunal Constitucional.

La actual situación de crisis económica, en gran medida debida a estos y otros excesos de la actividad constructiva e inmobiliaria, han supuesto un aterrizaje forzoso de ciertos planteamientos desarrollistas que, tanto desde el punto de vista político como especialmente social, eran predominantes hasta no hace demasiado tiempo en la Región de Murcia. Desde este punto de vista, se pueden observar cambios de tendencia en lo que hasta ahora ha sido una política favorecedora de la urbanización de espacios sensibles⁶. En general y con todas las precauciones que la cambiante evolución de los acontecimientos sociales conlleva, se puede afirmar que, poco a poco, se impone la realidad de que la urbanización ligada al turismo puede suponer, además de determinados beneficios económicos, un riesgo tanto para la protección de espacios como para la adecuada gestión del agua.

En esta materia del agua, como se sabe una de las principales preocupaciones en Murcia, la práctica totalidad de la Región se encuentra enclavada en la Cuenca del río Segura que, dado su carácter intercomunitario, es gestionada por el Estado a través de la Confederación Hidrográfica. No obstante, debe ser conocido que el territorio de la CARM cuenta con una cuenca hidrográfica interna cuya delimitación territorial se revisará, según el RD 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas (disposición transitoria única), una vez se haya efectuado el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad autónoma. Hasta tanto ello no se produzca, esta cuenca hidrográfica interna no traspasada queda provisionalmente adscrita a la Demarcación Hidrográfica del Segura. No es, sin duda, este el principal problema relacionado con la cantidad y calidad del agua en Murcia⁷, pero si nos parece expresivo de una determinada forma de entender las propias responsabilidades cuando la CARM no asume sus competencias en una materia en la

⁶ Vid. Diario *La Verdad*, “La Comunidad tumba el plan municipal de recalificar suelo en la Bahía de Portmán”, 02/03/2010, donde se da cuenta del rechazo a la recalificación de suelo que había planteado el Ayuntamiento de Cartagena mediante informe negativo de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma. La recalificación permitiría a la empresa «Portmán Golf» urbanizar 31 hectáreas de las más de mil compradas a fines de los años ochenta por la empresa (propiedad de los empresarios Francisco García y Mariano Roca) a la multinacional minera francesa Peñarroya. Ésta explotó el lavadero Roberto y vertió los residuos a la bahía, ocasionando un daño ambiental irreversible y cuya regeneración por parte del Ministerio de Medio Ambiente sigue pendiente.

⁷ Vid. el Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Segura para conocer las cuestiones principales y los retos de adaptación de la Cuenca a las exigencias de la Directiva marco del Agua (accesible en <http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion>).

que se reclama, con tanta insistencia, el respeto y mantenimiento de la actual distribución competencial.

2. La regulación autonómica de los procedimientos ambientales: la Ley 4/2009

2.1. El objeto y la justificación de la nueva Ley

Sin duda el mayor evento normativo que en materia ambiental se ha producido en la CARM viene representado por la aprobación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Tiene por objeto establecer el régimen jurídico y los procedimientos integrados de intervención administrativa a los que deben sujetarse los planes, programas, proyectos y actividades que pueden afectar al medio ambiente con la finalidad de mejorar el nivel de protección del medio ambiente en el marco de las competencias de la CARM. Para ello, deroga la anterior Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia⁸ y desarrolla, con mayor o menor entusiasmo, una serie de normas básicas estatales hasta ahora carentes de tratamiento en la CARM: la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente; la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la Información, de Participación pública y de Acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y, por último, las diversas modificaciones sufridas por la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental consolidadas en el vigente Real Decreto-Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

⁸ Asimismo, queda derogada la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y las referencias que dicha norma hace a la evaluación de impacto ambiental, al estudio de impacto ambiental y a la declaración de impacto ambiental de instrumentos de ordenación territorial o urbanística. Se derogan igualmente los apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 2, y el artículo 9 del Decreto 16/1999, de 22 de abril, de vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado. En lo demás, y hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado 4 del artículo 66, mantendrá su vigencia el citado Decreto en lo que no se oponga a esta ley. En particular, se mantiene vigente la relación de vertidos prohibidos (anexo II), de valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación (anexo III) y de los métodos analíticos establecidos para la determinación de las características de los vertidos (anexo IV). Por último, se deroga la Orden de 11 de diciembre de 1997, de adecuación de las industrias y demás actividades a las exigencias de la legislación ambiental.

2.2. *Estructura y principales contenidos de la Ley*

La Ley se estructura en nueve títulos a los que se acompañan cuatro anexos. El título preliminar contempla las disposiciones generales: delimita su objeto (art. 1), establece los fines, principios y su ámbito de aplicación (arts. 2 y 3), enumera las competencias municipales (art. 4) y trata de enmarcar las directrices, planes y programas al servicio de la política ambiental dentro de los instrumentos de ordenación del territorio (art. 8).

El título I contiene normas generales aplicables a las autorizaciones con fines ambientales (art. 10. 1) entre las que distingue tres grandes tipos de actividades cuya autorización tiene un tratamiento jurídico diferente: las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, las sujetas a la nueva autorización ambiental única y las sometidas únicamente a licencia de actividad. Completa el contenido de este Título I las determinaciones comunes a todas las autorizaciones con fines ambientales: fines generales (art. 11), deberes de los titulares de instalaciones y actividades (art. 12), creación de un registro ambiental de actividades (art. 14) y las reglas de coordinación de las autorizaciones con fines ambientales con otro tipo de autorizaciones y licencias (arts. 15 y 16).

El título II, centrado en las autorizaciones ambientales autonómicas, comprende un capítulo I, con normas comunes (arts. 17-24), y dos capítulos más, relativos a la autorización ambiental integrada (arts. 25-44) y la autorización ambiental única (arts. 45-58). El Título III, por su parte, desarrolla el régimen de la licencia de actividad, distinguiendo tres categorías de actividades, según el procedimiento para la obtención de la licencia: las sometidas a autorización ambiental autonómica (arts. 70-75), las sujetas a informe de calificación ambiental (arts. 76-82), y las actividades exentas de calificación ambiental (art. 63).

En síntesis, la regulación de las actividades sujetas a autorización integrada y su control ambiental mantiene las previsiones de la legislación estatal, con alguna innovación en relación a la participación municipal en el procedimiento. Se aprovecha también para coordinar la evaluación ambiental de proyectos con la autorización ambiental integrada, algo que la legislación estatal dejó a cargo de las normas de desarrollo autonómico. La tramitación de ambos instrumentos se unifica, salvo el acto por el que se emite la declaración de impacto ambiental, que ha de ser previo a la propia autorización ambiental integrada, permitiendo así al órgano sustantivo plantear la eventual

discrepancia prevista en la legislación básica reguladora de la evaluación ambiental de proyectos.

Para aquellas actividades distintas de las anteriores y a las que la legislación básica sujeta a evaluación de impacto ambiental o a una autorización ambiental específica (de residuos, vertidos al mar o emisiones a la atmósfera), la Ley murciana unifica estos controles mediante la creación de una denominada autorización ambiental única que, como mecanismo de simplificación formal, integra las distintas autorizaciones y evaluaciones ambientales autonómicas existentes. En este sentido, se sujetan a autorización ambiental única las actividades e instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada, pero sí a evaluación de impacto ambiental, o bien a alguna de las autorizaciones ambientales específicas de competencia autonómica.

El procedimiento de autorización ambiental única mantiene similitud con el propio de la integrada, si bien con algunas diferencias que procuran la simplificación, en mayor o menor medida según se trate de proyectos sujetos o no a evaluación de impacto ambiental. Esta nueva autorización ambiental única se coordina con la licencia de actividad de manera similar a como se hace en el régimen de autorización ambiental integrada: con la nueva Ley, cuando una actividad esté sujeta a una autorización ambiental autonómica (integrada o única), no se sigue el procedimiento de licencia de actividad, que (salvo en lo relativo al otorgamiento de la licencia) se sustituye por el procedimiento autonómico correspondiente, en el cual el Ayuntamiento participa mediante un control urbanístico previo. El comienzo de la explotación de instalaciones sometidas a autorización ambiental autonómica se comunica previamente al órgano autonómico competente y al ayuntamiento, pero no está sujeto a acta o autorización de puesta en marcha. El resultado es que cualquier actividad, después de obtener sus autorizaciones con fines ambientales, podrá comenzar la explotación tan pronto practique las comunicaciones mencionadas, lo que no implica descuidar el control de su repercusión ambiental, que queda garantizado con la exigencia de un informe de una Entidad de Control Ambiental y con una primera comprobación administrativa de la instalación o actividad.

El tercer tipo de actividades serán las no sujetas a autorizaciones autonómicas y que se someten sólo a licencia municipal de actividad como procedimiento de control preventivo. La intervención de la Comunidad Autónoma se reduce en este ámbito, aunque se prevé que aquellos ayuntamientos que no dispongan de medios materiales o

personales puedan solicitarle que realice el informe de calificación ambiental de la actividad. Se busca también la integración de las autorizaciones municipales con fines ambientales, para lo cual el vertido al alcantarillado ya no se controla mediante una autorización específica, sino a través de la propia licencia de actividad.

La Ley mantiene la categoría tradicional de actividades exentas o inocuas para las que la solicitud de licencia se ha de resolver en tres meses como máximo, transcurridos los cuales sin resolución expresa se entiende concedida. Se permite que los ayuntamientos puedan sustituir la licencia por una comunicación previa que habilita directamente para comenzar la actividad, en la línea de las importantes novedades que, en materia de actividad de policía administrativa, introducen las Leyes estatales 17/2009 y, sobre todo, la 25/2009.

El título IV regula la evaluación ambiental de proyectos que venía regulándose en el ámbito de la CARM por la ahora derogada Ley 1/1995. Los proyectos sometidos en cualquier caso a EIA vienen recogidos en el apartado A de su anexo III, además de aquellos que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 (art. 84. 2. b y art. 95). Aquellos proyectos que serán sometidos a EIA caso por caso están contemplados en el apartado B de dicho anexo (art. 85).

La Ley actualiza aquí el listado de proyectos sujetos a evaluación ambiental, tomando como base la lista estatal, aunque se mantienen, no obstante, algunos supuestos adicionales que las normas básicas estatales no someten a evaluación ambiental. Así, en la CARM se someterán los proyectos que tengan por objeto campos de golf, plantas desaladoras o desalinizadoras, supuestos de urbanizaciones y complejos hoteleros, o plantas de producción de energía solar térmica o fotovoltaica.

Otras previsiones destacables de la Ley, en relación con la evaluación ambiental de proyectos, son la unificación de su tramitación dentro de las autorizaciones ambientales autonómicas, la integración de la evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000 dentro de la evaluación ambiental del proyecto, o la necesidad de especificar dentro de la propia declaración de impacto ambiental los distintos órganos competentes para su seguimiento y vigilancia.

El régimen de la evaluación ambiental de planes y programas, que carecía hasta la fecha de desarrollo legislativo en la CARM, se regula en su título V (arts. 100-111),

determinando su art. 104 qué planes y programas deben ser sometidos a este trámite, con remisión a su Anexo IV para los instrumentos de ordenación urbanística⁹.

El título VI contiene dos capítulos: el primero desarrolla diversos instrumentos destinados a fomentar la toma de conciencia e implicación de empresas, asociaciones y ciudadanos en la defensa del medio ambiente (arts. 112-118); y el segundo capítulo, destinado a fomentar mecanismos de lucha frente al cambio climático (arts. 119-121).

El título VII (arts. 122-124) da un respaldo específico a medios de reconocimiento de la excelencia ambiental de las empresas como son los sistemas de gestión y auditoría ambiental (EMAS, ISO 14000), la etiqueta ecológica, así como el fomento de la contratación ambientalmente responsable.

El título VIII (arts. 125-166), por último, contiene el régimen de control y disciplina ambiental, con normas reguladoras de la actividad de inspección, la responsabilidad ambiental (con remisión en bloque para los daños ambientales a la ley estatal 26/2007 —art. 137—), las medidas de restablecimiento de la legalidad ambiental (que toma algunos elementos de la disciplina urbanística, pero con las peculiaridades que impone la materia ambiental, en la cual las licencias y autorizaciones son de actividad o funcionamiento), y se cierra con el régimen de infracciones y sanciones aplicables.

La Ley incorpora además once disposiciones adicionales —algunas de ellas de contenido tan relevante como la creación de impuestos por contaminación ambiental (disposición adicional 8^a)—, ocho transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales, además de los cuatro anexos ya mencionados.

3.3. Consideraciones críticas generales

No procede, a efectos de esta crónica, realizar un examen crítico pormenorizado de los múltiples y complejos aspectos que plantea esta nueva Ley murciana. Dejemos simplemente apuntado que, en primer lugar, procede saludar convenientemente el nuevo impulso legislativo que recibe la política ambiental autonómica con la que se reduce, en parte, el evidente déficit ambiental que aquejaba al panorama normativo ambiental en

⁹ La Ley del Suelo regional sí establecía la necesidad de evaluación de impacto ambiental de la mayor parte de los instrumentos de planeamiento urbanístico (Decreto-Legislativo 1/2005, disposición adicional segunda en relación con su art. 95). Para un consideración crítica sobre las limitaciones en esta materia de la normativa murciana *vid.* FERNÁNDEZ TORRES, J. R., *La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas Urbanísticos*, Thomson/Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 64-66.

esta Región. Ciertamente, algunas cuestiones reciben un insuficiente tratamiento —el derecho de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia o, por indicar dos relevantes, la responsabilidad derivada de daños ambientales— y otras quedan remitidas a posteriores desarrollos reglamentarios: pero, en una valoración general, insistimos de nuevo en el avance que supone respecto a la situación anterior.

Más problemático se presenta el panorama aplicativo de la norma en relación a la insuficiencia de los medios organizativos, materiales y personales necesarios para su cabal puesta en práctica. Ya hemos aludido al escaso peso político de las estructuras administrativas regionales responsables de la ejecución de la política ambiental y, adicionalmente, la escasez de recursos humanos existentes para el despliegue de gestión que su puesta en marcha comporta.

Es cierto que, durante estos meses transcurridos desde su publicación, la Administración Ambiental regional ha trabajado internamente con distintos sectores empresariales, instituciones y organismos — básicamente celebración de diversas jornadas y mesas de trabajo—para que esta nueva Ley, cuyos objetivos principales son la integración de trámites y la mayor agilidad administrativa dentro del marco legal europeo y estatal existente, comience a aplicarse desde su entrada en vigor. Debemos pues confiar en que el impulso tenga su continuación y que, de modo efectivo, podamos comprobar tanto una mayor eficacia en la gestión de los procedimientos ambientales como, sobre todo, una elevación de los niveles de protección ambiental en Murcia.

3. Otras manifestaciones normativas de la política ambiental

3.1. Movilidad sostenible

En relación con las políticas europeas referidas a la sostenibilidad ambiental en distintos sectores y de acuerdo con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, donde se da carta de naturaleza a la potenciación del transporte público como una obligación de las Administraciones Públicas mediante la promoción de todo tipo de actuaciones encaminadas a la generación de una alternativa de movilidad al transporte privado, la Ley 10/2009, de 30 noviembre, de Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y Modernización de las Concesiones de Transporte Público Regular Permanente de Viajeros por Carretera, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2009, determina los

indicadores mínimos de utilización de biocombustibles a emplear en los vehículos que prestan los servicios concesionales. En este sentido, su art. art. 7 prevé, entre los criterios para el establecimiento de las condiciones mínimas de prestación de los servicios que “1. Los servicios que se adhieran al Sistema Integrado de Servicios de Transporte deberán prestarse en las condiciones que se establezcan en cada caso en el correspondiente contrato/programa, de acuerdo con los siguientes criterios de carácter mínimo:... d) Sostenibilidad de la explotación, especialmente en lo relativo a la utilización de motores o combustibles alternativos y de todas aquellas medidas que puedan mejorar los índices de sostenibilidad medioambiental de los servicios, y que en la práctica supongan al menos el empleo de combustibles alternativos como mínimo en el veinticinco por ciento de la flota adscrita a las concesiones de la Región de Murcia”.

3.2. Ahorro y eficiencia en la gestión industrial del agua

La Ley 6/2006, de 21 de julio, de Incremento de las Medidas de Ahorro y Conservación del Agua en la Región de Murcia, supuso una mejora en el control de los volúmenes ahorrados de agua, dentro del sector industrial, mediante la implantación de planes de ahorro (art. 11. 2). En este sentido, se dictó la Orden de 22 de enero de 2007, sobre el Sistema de Vigilancia e información de la Gestión Industrial del Agua (VIGIA) y, desde su entrada en vigor, se ha comprobado que es necesario que se maticen conceptos, se introduzcan otros y se actualice la clasificación nacional de actividades económicas.

En consecuencia, la Orden de 15 diciembre 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua modifica la anterior Orden al introducir un nuevo art. 1.bis donde se contienen las definiciones de los conceptos a declarar en el sistema VIGIA (volumen de producción, agua consumida, agua perdida durante el proceso productivo, agua residual generada en el proceso de producción, etc.); establecer nuevos plazos de cumplimiento del sistema (art. 8); establecer los contenidos mínimos de los planes de ahorro (art. 9) y adecuar su Anexo I al Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para las actividades obligadas a la preparación y comunicación de planes de ahorro de agua y prever, en su Anexo II, los contenidos mínimos de los planes de ahorro de agua. Entró en vigor el día 23 de diciembre de 2009.

3.3. Mejora de la información y control de la actividad agrícola

El Decreto 448/2009, de 29 diciembre, de la Consejería Agricultura y Agua, crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como herramienta que permita un mejor conocimiento del sector agrario murciano, que a su vez sirva como instrumento de planificación de la política agraria y que garantice la eficacia en la aplicación y la gestión de ayudas al sector. El registro tiene un carácter general, por lo que cualquier explotación agraria es susceptible de inscripción, y constituirá así el elemento que ordene y sistematice la información en poder de la Administración Regional. Se configura, además, como un apoyo en el desarrollo de las políticas agroalimentarias y medioambientales. Complementa, por otra parte, la Orden de 8 de abril de 2008 que reguló el Régimen del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) en la CARM, única base de referencia para la identificación de las parcelas agrícolas. Entró en vigor el 6 de enero de 2010.

Sumari: 1. Breu panorama d’algun dels principals reptes de la política ambiental de la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia. 2. La regulació autonòmica dels procediments ambientals: la Llei 4/2009. 2.1. L’objecte i la justificació de la nova llei. 2.2. Estructura i principals continguts de la llei. 3.3. Consideracions crítiques generals. 3. Altres manifestacions normatives de la política ambiental. 3.1. Mobilitat sostenible. 3.2. Estalvi i eficiència en la gestió industrial de l'aigua. 3.3. Millora de la informació i del control de l'activitat agrícola.

1. Breu panorama d’algun dels principals reptes de la política ambiental de la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia

La Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia (en endavant, CARM) s’ha plantejat reptes importants en la definició d’una política i normativa ambiental específica. L’objecte d’aquesta crònica no consisteix, de forma evident, a realitzar cap estudi exhaustiu i detallat de cadascun. No obstant això, no ens estem d’esmentar uns quants aspectes i qüestions principals perquè el lector s’aproximi al territori en què es produeixen les novetats que, a continuació, s’assenyalen en aquesta crònica¹⁰.

En aquest sentit, malgrat alguns avanços significatius com el que representa la recent Llei 4/2009, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2010 i a què farem referència posteriorment, convé assentar uns quants reptes pendents. En primer lloc, des del punt de vista organitzatiu, és evident el poc pes polític que s’ha atorgat a la política ambiental des que es va suprimir el 2008 la Conselleria de Desenvolupament Sostenible i Ordenació del Territori —si bé és cert que només havien transcorregut pocs mesos des que es va crear. Des del nostre punt de vista, la recuperació d’una conselleria específica —actualment, és la Conselleria d’Agricultura i Aigua la que suporta el nucli de l’acció ambiental regional— o, almenys, l’existència d’un òrgan de coordinació horitzontal —Secretaria Autonòmica— seria un element indispensable per atorgar el pes polític i organitzatiu que les qüestions ambientals han de tenir. Com sintetitzen GUTIÉRREZ LLAMAS i FERNÁNDEZ SALMERÓN: “el tret distintiu de la nova organització governamental pel que fa a la política ambiental és la dispersió —fins i tot la menysvaloració— de les estructures administratives encarregades d’exercir les funcions i les competències en aquest àmbit”¹¹.

¹⁰ El seguiment de la realitat murciana en aquest àmbit es pot obtenir dels informes que els professors A. GUTIÉRREZ LLAMAS i M. FERNÁNDEZ SALMERÓN elaboren amb caràcter anual per a l’Observatori de Polítiques Ambientals que coordina F. LÓPEZ RAMÓN.

¹¹ GUTIÉRREZ LLAMAS, A., FERNÁNDEZ SALMERÓN, F., “Murcia: el desmantelamiento del departamento ambiental”, López Ramón, F. (coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2009*, Thomson/Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 653-682.

En matèria d'espais naturals protegits i de protecció de la biodiversitat, l'antiga i amputada Llei 4/1992, de 30 de juliol, d'ordenació i protecció del territori de la Regió de Múrcia —de la qual només en queden vigents els articles 45 a 51— fa temps que es va haver de derogar definitivament i adaptar a la Llei bàsica estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat¹². Per descomptat, les referències que conté l'esmentada Llei murciana 4/2009 a l'avaluació de les repercussions a Xarxa Natura 2000 (art. 45 de la Llei estatal 42/2007) no són suficients, la qual només dóna compte de la seva integració en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental (art. 95 i 96) i en el procediment d'avaluació ambiental de plans i programes (art. 109 i 110). Per la seva banda, la legislació del sòl, representada en l'àmbit de la CARM pel Decret legislatiu 1/2005, de 10 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei del sòl de la Regió de Múrcia, està pendent de reforma per adaptar-se a la Llei 8/2007 del sòl estatal¹³. Concretament, la llei estatal estableix que alterar els límits dels espais naturals protegits, mitjançant la reducció de la superfície o l'exclusió de porcions de terrenys per ser posats en producció, només es justifica per degradació natural, científicament demostrada¹⁴. Aquesta nova mesura, d'importància específica per preservar espais de gran valor ecològic, surt a l'encontre d'operacions discutibles dutes a terme a la Regió de Múrcia mitjançant la laminació d'espais naturals, entre d'altres, tan capdavanters com el parc regional de Cabo Cope-Calnegre, encara pendent de la sentència del Tribunal Constitucional des de 2001.

L'actual situació de crisi econòmica, en gran manera deguda a aquests excessos de l'activitat constructiva i immobiliària i a d'altres, ha suposat l'aterratge forçós de certs plantejaments desenvolupistes que, tant des del punt de vista polític com especialment

¹² D'acord amb la sistemàtica de la legislació bàsica estatal, l'aprovació d'aquesta nova llei hauria d'afectar també la Llei regional 7/1995, de 21 d'abril, de fauna silvestre de la Regió de Múrcia. El compliment deficient dels mandats proteccionistes d'aquesta llei es posen de manifest en la Resolució del defensor del poble de la Regió de Múrcia, de 30 de desembre de 2009 (accessible a <http://www.defensorrm.es>).

¹³ Per a una interpretació concordada de la legislació regional amb la nova normativa estatal, *vid.* LÓPEZ PELLICER, J. A., *La Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Comentarios a la Ley del Suelo de la Región de Murcia*, Diego Marín, Murcia, 2009². En general, per a la recopilació de la legislació ambiental de Múrcia, *vid.* MARTÍNEZ NIETO, A., *Código de Medio Ambiente de la Región de Murcia*, Wolters Kluwer, Madrid, 2008.

¹⁴ En aquest sentit, el paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 13 estableix que “només podrà alterar-se la delimitació dels espais naturals protegits o dels espais inclosos a Xarxa Natura 2000, reduint-ne la superfície total o excluent-hi terrenys, quan així ho justifiquin els canvis provocats per la seva evolució natural, científicament demostrada. L'alteració s'ha de sotmetre a informació pública, que en el cas de Xarxa Natura 2000 s'ha de fer de forma prèvia a la remissió de la proposta de descatalogació a la Comissió Europea i l'acceptació d'aquesta descatalogació”.

social, predominaven fins no fa gaire a la Regió de Múrcia. Des d'aquest punt de vista, es poden observar canvis de tendència en el que fins ara ha estat una política que ha afavorit la urbanització d'espais sensibles.¹⁵ En general, i amb totes les precaucions que l'evolució canviant dels esdeveniments socials comporta, es pot afirmar que, a poc a poc, s'imposa la realitat que la urbanització lligada al turisme pot suposar, a més de determinats beneficis econòmics, un risc tant per protegir espais com per gestionar adequadament l'aigua.

Pel que fa a l'aigua, com se sap, una de les principals preocupacions a Múrcia, la pràctica totalitat de la Regió s'enclava a la conca del riu Segura que, donat el caràcter intercomunitari, és gestionada per l'Estat a través de la Confederació Hidrogràfica. No obstant això, s'ha de saber que el territori de la CARM compta amb una conca hidrogràfica interna amb una delimitació territorial que s'ha de revisar, segons el RD 125/2007, de 2 de febrer, pel que es fixa l'àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques (disposició transitòria única), un cop s'hagi efectuat el traspàs de funcions i serveis a la comunitat autònoma. Fins que això no es produeixi, aquesta conca hidrogràfica interna no traspassada s'adscriu provisionalment a la Demarcació Hidrogràfica del Segura. Sens dubte, aquest no és el principal problema relacionat amb la quantitat i la qualitat de l'aigua a Múrcia¹⁶, però ens sembla que expressa una determinada forma d'entendre les pròpies responsabilitats quan la CARM no n'assumeix les competències en una matèria en què es reclama, amb tanta insistència, el respecte i el manteniment de la distribució competencial actual.

¹⁵ Vid. diari *La Verdad*: “La Comunitat tomba el pla municipal de requalificar sòl a la badia de Portmán”, 02/03/2010, on es dóna compte del rebuig a la requalificació de sòl que havia plantejat l'Ajuntament de Cartagena mitjançant l'informe negatiu de la Direcció General de Patrimoni Natural i Biodiversitat de la comunitat autònoma. La requalificació permetria a l'empresa Portmán Golf urbanitzar 31 hectàrees de les més de mil comprades a finals dels anys vuitanta per l'empresa (propietat dels empresaris Francisco García i Mariano Roca) a la multinacional minera francesa Peñarroya. Aquesta va explotar el safareig Roberto i va abocar els residus a la badia, amb la qual cosa va provocar danys ambientals irreversibles, la regeneració de la qual per part del Ministeri de Medi Ambient continua pendent.

¹⁶ Vid. l'Esquema Provisional de Temes Importants de la Demarcació Hidrogràfica del Segura per conèixer les qüestions principals i els reptes d'adaptació de la conca a les exigències de la Directiva marc de l'aigua (accessible a <http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacio>).

2. La regulació autonòmica dels procediments ambientals: la Llei 4/2009

2.1. L'objecte i la justificació de la nova llei

Sens dubte, l'esdeveniment normatiu més gran que en matèria ambiental s'ha produït a la CARM està representat per l'aprovació de la Llei 4/2009, de 14 de maig, de protecció ambiental integrada, i que ha entrat en vigor l'1 de gener de 2010. Té com a objecte establir el règim jurídic i els procediments integrats d'intervenció administrativa a què han de subjectar-se els plans, els programes, els projectes i les activitats que poden afectar el medi ambient amb la finalitat de millorar el nivell de protecció del medi ambient en el marc de les competències de la CARM. Per això, deroga l'anterior Llei 1/1995, de 8 de març, de protecció del medi ambient de la Regió de Múrcia¹⁷ i desplega, amb major o menor entusiasme, una sèrie de normes bàsiques estatals que fins ara no tenien cap tractament a la CARM: la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient; la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental; la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per acabar, les diverses modificacions de la normativa reguladora de l'avaluació d'impacte ambiental que consolida el vigent Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'avaluació d'impacte ambiental.

2.2. Estructura i principals continguts de la llei

La llei s'estructura en nou títols als quals s'acompanyen quatre annexos. El títol preliminar preveu les disposicions generals: en delimita l'objecte (art. 1), estableix els fins, els principis i l'àmbit d'aplicació (art. 2 i 3), enuncia les competències municipals

¹⁷ Així mateix, queda derogada la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2005, de 10 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei del sòl de la Regió de Múrcia, i les referències que aquesta norma fa a l'avaluació de l'impacte ambiental, a l'estudi d'impacte ambiental i a la declaració d'impacte ambiental d'instruments d'ordenació territorial o urbanística. Es deroguen igualment els apartats 4, 5, 6 i 7 de l'article 2, i l'article 9 del Decret 16/1999, de 22 d'abril, d'abocaments d'aigües residuals industrials al clavegueram. A la resta, i fins a l'entrada en vigor del desplegament reglamentari a què es refereix l'apartat 4 de l'article 66, manté la seva vigència l'esmentat decret en els aspectes que no s'oposin a aquesta llei. En particular, es manté vigent la relació d'abocaments prohibits (annex I), de valors màxims instantanis dels paràmetres de contaminació (IV). Finalment, es deroga l'Ordre d'11 de desembre de 1997, d'adequació de les indústries i altres activitats a les exigències de la legislació ambiental.

(art. 4) i tracta d'emmarcar les directrius, els plans i els programes al servei de la política ambiental dins els instruments d'ordenació del territori (art. 8).

El títol I conté normes generals aplicables a les autoritzacions amb fins ambientals (art. 10. 1), entre les quals distingeix tres grans tipus d'activitats, l'autorització de les quals té un tractament jurídic diferent: les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, les que estan subjectes a la nova autorització ambiental única i les que estan sotmeses únicament a llicència d'activitat. Completa el contingut del títol I les determinacions comunes a totes les autoritzacions amb fins ambientals: fins generals (art. 11), deures dels titulars d'instal·lacions i activitats (art. 12), creació d'un registre ambiental d'activitats (art. 14) i les regles de coordinació de les autoritzacions amb fins ambientals amb un altre tipus d'autoritzacions i llicències (art. 15 i 16).

El títol II, centrat en les autoritzacions ambientals autonòmiques, comprèn el capítol I, amb normes comunes (art. 17-24), i dos capítols més, relatius a l'autorització ambiental integrada (art. 25-44) i l'autorització ambiental única (art. 45-58). El títol III, per la seva banda, desplega el règim de la llicència d'activitat, i distingeix tres categories d'activitats, segons el procediment per obtenir la llicència: les que estan sotmeses a autorització ambiental autonòmica (art. 70-75), les que estan subjectes a l'informe de qualificació ambiental (art. 76-82), i les activitats exemptes de qualificació ambiental (art. 63).

En síntesi, la regulació de les activitats subjectes a autorització integrada i a control ambiental manté les previsions de la legislació estatal, amb alguna innovació pel que fa a la participació municipal en el procediment. S'aprofita també per coordinar l'avaluació ambiental de projectes amb autorització ambiental integrada, cosa que la legislació estatal ha deixat a càrrec de les normes de desplegament autonòmic. La tramitació d'ambdós instruments s'unifica, excepte l'acte pel qual s'emet la declaració d'impacte ambiental, que ha de ser previ a la mateixa autorització ambiental integrada, permetent així a l'òrgan substantiu plantejar la discrepància eventual prevista en la legislació bàsica reguladora de l'avaluació ambiental de projectes.

Respecte a les activitats diferents de les anteriors i a les que la legislació bàsica subjecta a avaluació d'impacte ambiental o a autorització ambiental específica (de residus, abocaments al mar o emissions a l'atmosfera), la llei murciana unifica aquests controls mitjançant la creació d'una autorització ambiental única que, com a mecanisme de simplificació formal, integra les diferents autoritzacions i avaluacions ambientals

autonòmiques que hi ha. En aquest sentit, estan subjectes a autorització ambiental única les activitats i les instal·lacions no sotmeses a autorització ambiental integrada, però sí a avaluació d'impacte ambiental, o bé a alguna de les autoritzacions ambientals específiques de competència autonòmica.

El procediment d'autorització ambiental única té algunes similituds amb el propi de la integrada, si bé hi ha algunes diferències que procuren simplificar-lo, en major o menor mesura segons es tracti de projectes subjectes o no a avaluació d'impacte ambiental. Aquesta nova autorització ambiental única es coordina amb la llicència d'activitat de manera similar al mode com es fa en el règim d'autorització ambiental integrada: amb la nova llei, quan una activitat està subjecta a autorització ambiental autonòmica (integrada o única), no se segueix el procediment de llicència d'activitat, que (excepte pel que fa a l'atorgament de la llicència) se substitueix pel procediment autonòmic corresponent, en el qual l'Ajuntament participa mitjançant el control urbanístic previ. L'inici de l'explotació d'instal·lacions sotmeses a autorització ambiental autonòmica es comunica prèviament a l'òrgan autonòmic competent i a l'Ajuntament, però no està subjecte a l'acta o l'autorització de posada en funcionament. El resultat és que qualsevol activitat, després d'obtenir les autoritzacions amb fins ambientals, pot començar l'explotació tan bon punt practiqui les comunicacions esmentades, la qual cosa no implica descuidar el control de la repercussió ambiental, que queda garantit amb l'exigència de l'informe d'una entitat de control ambiental i amb la primera comprovació administrativa de la instal·lació o activitat.

El tercer tipus d'activitats seran les que no estan subjectes a autoritzacions autonòmiques i que se sotmeten només a llicència municipal d'activitat com a procediment de control preventiu. La intervenció de la comunitat autònoma es redueix en aquest àmbit, encara que es preveu que els ajuntaments que no disposin de mitjans materials o personals puguin sol·licitar-li que realitzi l'informe de qualificació ambiental de l'activitat. Es busca també la integració de les autoritzacions municipals amb fins ambientals, per la qual cosa l'abocament al clavegueram ja no es controla mitjançant cap autorització específica, sinó a través de la mateixa llicència d'activitat.

La llei manté la categoria tradicional d'activitats exemptes o innòcues i la sol·licitud de llicència s'ha de resoldre en tres mesos com a màxim. Transcorreguts aquests sense resolució expressa, s'entén que la llicència s'ha concedit. Es permet que els ajuntaments puguin substituir la llicència per una comunicació prèvia que habilita directament per

començar l'activitat, en la línia de les importants novetats que, en matèria d'activitat de policia administrativa, introduceixen les lleis estatals 17/2009 i, sobretot, la 25/2009.

El títol IV regula l'avaluació ambiental de projectes que regulava en l'àmbit de la CARM la Llei 1/1995 derogada. En qualsevol cas, els projectes sotmesos a EIA es recullen en l'apartat A de l'annex III, a més dels que que puguin afectar directament o indirectament els espais de Xarxa Natura 2000 (art. 84. 2. b i art. 95). Els projectes que s'han de sotmetre a EIA cas per cas es preveuen en l'apartat B d'aquest annex (art. 85).

Aquí, la llei actualitza el llistat de projectes subjectes a avaluació ambiental, prenent com a base la llista estatal, tot i que es mantenen, no obstant això, uns quants supòsits addicionals que les normes bàsiques estatals no sotmeten a avaluació ambiental. Així, a la CARM s'han de sotmetre els projectes que tinguin com a objectiu camps de golf, plantes dessaladores o dessalinitzadores, supòsits d'urbanitzacions i complexos hotelers, o plantes de producció d'energia solar tèrmica o fotovoltaica.

Altres previsions destacables de la llei, en relació amb l'avaluació ambiental de projectes, són la unificació de la tramitació en les autoritzacions ambientals autonòmiques, la integració de l'avaluació de repercussions a Xarxa Natura 2000 en l'avaluació ambiental del projecte, o la necessitat d'especificar a la mateixa declaració d'impacte ambiental els diferents òrgans competents per al seu seguiment i vigilància.

El règim de l'avaluació ambiental de plans i programes, que mancava fins avui de desplegament legislatiu a la CARM, es regula en el títol V (art. 100-111), i determina l'art. 104 quins plans i programes s'han de sotmetre a aquest tràmit, amb remissió a l'annex IV per als instruments d'ordenació urbanística¹⁸.

El títol VI conté dos capítols: el primer desplega diversos instruments destinats a fomentar la presa de consciència i la implicació d'empreses, d'associacions i de ciutadans en la defensa del medi ambient (art. 112-118); i el segon capítol està destinat a fomentar mecanismes de lluita enfront del canvi climàtic (art. 119-121).

El títol VII (art. 122-124) dóna suport específic als mitjans de reconeixement de l'excellència ambiental de les empreses, com són els sistemes de gestió i auditoria

¹⁸ La llei del sòl regional sí que estableix la necessitat d'avaluar l'impacte ambiental de la major part dels instruments de planejament urbanístic (Decret legislatiu 1/2005, disposició addicional segona amb relació a l'art. 95). Per a una consideració crítica sobre les limitacions en aquesta matèria de la normativa murciana, *vid.* FERNÁNDEZ TORRES, J. R., *La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas Urbanísticos*, Thomson/Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 64-66.

ambiental (EMAS, ISO 14000), l'etiqueta ecològica, i el foment de la contractació ambientalment responsable.

El títol VIII (art. 125-166), per acabar, conté el règim de control i disciplina ambiental, amb normes reguladores de l'activitat d'inspecció, la responsabilitat ambiental (amb remissió en bloc per als danys ambientals a la llei estatal 26/2007 —art. 137—), les mesures de restabliment de la legalitat ambiental (que pren alguns elements de la disciplina urbanística, però amb les peculiaritats que imposa la matèria ambiental, en la qual les llicències i autoritzacions són d'activitat o funcionament), i es tanca amb el règim d'infraccions i sancions aplicables.

La llei incorpora, a més a més, onze disposicions addicionals —algunes de les quals de contingut tan rellevant com la creació d'impostats per contaminació ambiental (disposició addicional vuitena)—, vuit de transitòries, una de derogatòria i tres disposicions finals, a més dels quatre annexos esmentats.

3.3. Consideracions crítiques generals

No convé, als efectes d'aquesta crònica, realitzar cap examen crític detallat dels múltiples i complexos aspectes que planteja aquesta nova llei murciana. Indiquem simplement que, en primer lloc, s'escau saludar convenientment el nou impuls legislatiu que rep la política ambiental autonòmica amb la qual es redueix, en part, el dèficit ambiental evident que afigia el panorama normatiu ambiental en aquesta regió. Certament, algunes qüestions reben un tractament insuficient —el dret d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia o, per indicar-ne dos de rellevants, la responsabilitat derivada de danys ambientals—, i altres remeten a desplegaments reglamentaris posteriors: però, en una valoració general, insistim novament en l'avanç que suposa respecte a la situació anterior.

Més problemàtic es presenta el panorama aplicatiu de la norma quant a la insuficiència dels mitjans organitzatius, materials i personals necessaris per a la posada en pràctica. Ja hem esmentat l'escàs pes polític de les estructures administratives regionals responsables de l'execució de la política ambiental i, addicionalment, l'escassetat de recursos humans existents per desplegar la gestió que comporta la seva posada en marxa.

És cert que, durant aquests mesos transcorreguts des de la seva publicació, l'Administració ambiental regional ha treballat internament amb diferents sectors empresarials, institucions i organismes —bàsicament realització de diverses jornades i taules de treball— perquè aquesta nova llei, els objectius principals de la qual són la integració de tràmits i l'agilitat administrativa més gran en el marc legal europeu i estatal existent, comenci a aplicar-se des de l'entrada en vigor. Per tant, hem de confiar que l'impuls tindrà continuació i que, de mode efectiu, podrem comprovar més eficàcia en la gestió dels procediments ambientals i, sobretot, l'augment dels nivells de protecció ambiental a Múrcia.

3. Altres manifestacions normatives de la política ambiental

3.1. Mobilitat sostenible

Amb relació a les polítiques europees que fan referència a la sostenibilitat ambiental en diferents sectors i d'acord amb l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible, aprovada pel Consell de Ministres de 30 d'abril de 2009, on es dóna carta de natura a potenciar el transport públic com una obligació de les administracions públiques mitjançant la promoció de tota mena d'actuacions encaminades a generar una alternativa de mobilitat al transport privat, la Llei 10/2009, de 30 novembre, de creació del sistema integrat de transport públic de la Regió de Múrcia i modernització de les concessions de transport públic regular permanent de viatgers per carretera, que ha entrat en vigor el 2 de desembre de 2009, determina els indicadors mínims d'utilització de biocombustibles que s'han d'emprar en els vehicles que presten els serveis concessionals. En aquest sentit, l' art. 7 preveu, entre els criteris per establir les condicions mínimes de prestació dels serveis que “1. Els serveis que s'adhereixin al Sistema Integrat de Serveis de Transport han de prestar-se en les condicions que s'estableix en cada cas en el corresponent contracte/programa, d'acord amb els següents criteris de caràcter mínim: [...] d) Sostenibilitat de l'explotació, especialment quant a la utilització de motors o combustibles alternatius i de totes les mesures que puguin millorar els índexs de sostenibilitat mediambiental dels serveis, i que en la pràctica suposin almenys l'ocupació de combustibles alternatius com a mínim en el 25% de la flota adscrita a les concessions de la Regió de Múrcia”.

3.2. Estalvi i eficiència en la gestió industrial de l'aigua

La Llei 6/2006, de 21 de juliol, d'increment de les mesures d'estalvi i conservació de l'aigua a la Regió de Múrcia, va suposar una millora en el control dels volums estalviats d'aigua, en el sector industrial, mitjançant la implantació de plans d'estalvi (art. 11. 2). En aquest sentit, es va dictar l'Ordre de 22 de gener de 2007, sobre el Sistema de Vigilància i Informació de la Gestió Industrial de l'Aigua (VIGIA) i, des de la seva entrada en vigor, s'ha comprovat que cal matisar conceptes, que se n'introduixin de nous i que s'actualitzi la classificació nacional d'activitats econòmiques.

En conseqüència, l'Ordre de 15 desembre 2009 de la Conselleria d'Agricultura i Aigua modifica l'ordre anterior en introduir l'art.1.bis, que conté les definicions dels conceptes que s'han de declarar en el sistema VIGIA (volum de producció, aigua consumida, aigua perduda durant el procés productiu, aigua residual generada en el procés de producció, etc.); establir terminis nous de compliment del sistema (art. 8); establir els continguts mínims dels plans d'estalvi (art. 9) i adequar l'annex I al Codi Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) per a les activitats obligades a la preparació i comunicació de plans d'estalvi d'aigua i preveure, en l'annex II, els continguts mínims dels plans d'estalvi d'aigua. Ha entrat en vigor el dia 23 de desembre de 2009.

3.3. Millora de la informació i del control de l'activitat agrícola

El Decret 448/2009, de 29 desembre, de la Conselleria d'Agricultura i Aigua, crea i regula el Registre d'Explotacions Agràries a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia com a eina que permet conèixer millor el sector agrari murcià, que, al seu torn, serveix com a instrument de planificació de la política agrària i que garanteix l'eficàcia en l'aplicació i la gestió d'ajudes al sector. El registre té un caràcter general, per la qual cosa qualsevol explotació agrària és susceptible d'inscripció, i constitueix, així, l'element que ordena i sistematitza la informació en poder de l'Administració regional. Es configura, a més a més, com un suport en el desplegament de les polítiques agroalimentàries i mediambientals. Complementa, d'altra banda, l'Ordre de 8 d'abril de 2008 que regula el règim del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) a la CARM, base de referència única per identificar les parcel·les agrícoles. Ha entrat en vigor el 6 de gener de 2010.